

# Comentario Económico del día

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Julián Cortés

Noviembre 16 de 2016

## Retos de la descentralización en Colombia

Durante las últimas tres décadas, Colombia ha venido enfrentando serios desafíos en materia de descentralización política y fiscal. Si medimos esa descentralización por la vía fiscal, vemos que en Colombia se transfieren recursos a las regiones por un valor equivalente al 4.7% del PIB, lo cual implica que el Gobierno Central comparte cerca del 32% del total de sus recursos tributarios con los territorios. Este hecho, que suena bien a nivel de democracia territorial, ha demostrado tener pobres resultados cuando se evalúa la calidad del gasto público, especialmente en las áreas de educación, salud y conectividad vial del país (ver *Informe Semanal No.1205* de febrero de 2014).

Permitir que autoridades regionales administren parte de los recursos de la nación, en teoría, debería mejorar la capacidad estatal para afrontar los retos locales de la forma más adecuada. De esta manera, se esperaría que la calidad del gasto público regional, incluso en las zonas más rezagadas, tendiese a converger hacia la media nacional. Sin embargo, tal y como lo señala un reciente estudio publicado por la CEPAL, los resultados para el caso colombiano han demostrado mayor divergencia (ver [http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37821/S1421115\\_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37821/S1421115_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y)).

Dicho documento ilustra los rezagos locales en materia de calidad del gasto público en Colombia, siendo particularmente preocupantes los relativos a salud y educación. Allí se muestra cómo las marcadas diferencias en desarrollo socio-económico obligan a pensar en políticas sociales diferenciadas

por regiones-ciudades. Dicho estudio agrupa a las ciudades según sus características demográficas, observándose grandes diferencias entre Bogotá, Medellín o Bucaramanga (ciudades “mayores”) respecto de Riohacha o Quibdó (ciudades “embrionarias”). Por ejemplo, en calidad educativa, se tiene que más del 21% de los estudiantes de las ciudades “embrionarias” se ubican en el decil más bajo de las pruebas SABER 11, mientras que en las “mayores” este porcentaje solo llega al 5%. En el frente de salud, se tiene que la tasa de mortalidad infantil en Quibdó fue de 42.7 por cada mil individuos nacidos vivos en 2009, más de cuatro veces la registrada en ciudades como Cali (9.1) o Armenia (10.5).

Una forma resumida de dimensionar las diferencias locales es a través del índice de competitividad regional publicado por la Cepal. El gráfico adjunto ilustra cómo regiones como Bogotá, Antioquia o Caldas obtienen puntuaciones entre 70 y 90 puntos (siendo 100 buen desempeño en competitividad global), mientras que Guajira, Chocó o Guanía tan solo llegan a los 25 puntos. Esto hace evidente la abismal diferencia entre las regiones del interior respecto de las de la periferia del país.

Contrario a lo que la lógica económica indicaría, estamos lejos de alcanzar “convergencia socio-económica en Colombia” y si añadimos el factor de corrupción a nivel territorial (incluyendo la de Bogotá) la situación es verdaderamente decepcionante. De hecho, el Fiscal General de la Nación ha señalado recientemente, “la corrupción está deteriorando cada vez más la democracia en lo local, afectando

**Continúa**

Director: Sergio Clavijo

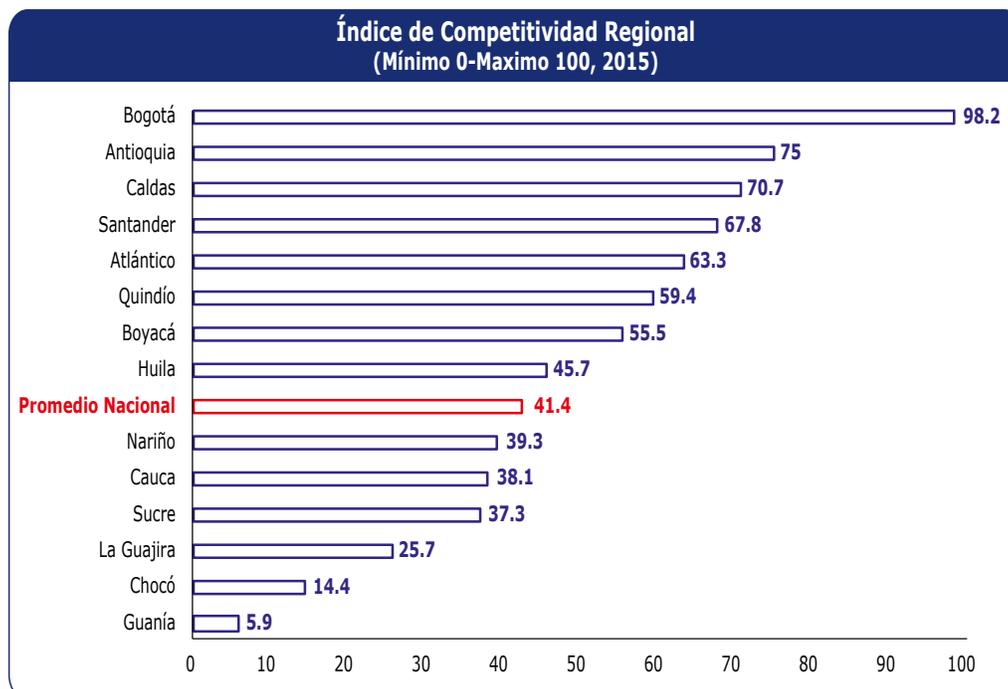
Con la colaboración de Julián Cortés

la credibilidad del ciudadano en su institucionalidad más próxima. Si nada se hace, los nuevos protagonistas de la política municipal, llegarán a ser gestores de la democracia departamental, como ya ha venido ocurriendo en algunas regiones del país, y -una vez extendidos a este nivel- finalmente habrán de capturar la vida nacional, para imponer su nueva filosofía en la que “lo público es lo privado de esta clase emergente de la dirigencia nacional” (ver discurso de instalación de la XXIX Asamblea General de Anif, octubre de 2016).

Sin embargo, y esto es lo paradójico, ni política ni económicamente hablando existe la menor posibilidad de darle marcha atrás a la descentralización en Colombia. Debemos entonces continuar propugnando por mejorar la aplicación territorial de dichos recursos y, sobre todo, redoblar los esfuerzos para evitar la malversación de los recursos públicos. Esto es especialmente urgente en los destinados a la educación y la salud. A este respecto, el desafío provendrá de lograr ejecuciones territoriales más eficientes en cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta entidad debería convertirse en el soporte técnico regional por excelencia, delegando sus funciones sectoriales en los ministe-

rios pertinentes, y redoblando sus labores de acompañamiento técnico territorial.

En síntesis, el acelerado proceso de descentralización en Colombia ha dejado resultados agrídulces tanto en el ámbito político como fiscal. En el frente político, los casos de corrupción e incompetencia han sido abundantes, propiciando numerosas sanciones por parte de los organismos de control. Recordemos que recientemente varios funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Ibagué se vieron envueltos en investigaciones por tergiversar recursos destinados a los escenarios deportivos para los juegos nacionales. Anif hizo un llamado para optimizar los recursos destinados al sector deportes, donde, en vez de organizarlos en una sola ciudad, se busque usar y remodelar los escenarios ya existentes en las diferentes ciudades (ver *Comentario Económico del Día* 22 de septiembre de 2016). A nivel fiscal, Colombia se ha convertido en uno de los países con mayor descentralización de América Latina, sin contar con un sistema verdaderamente federado, ni con las instituciones apropiadas para ello. Pero este esquema ha resultado sub-óptimo a la hora de aplicar esos recursos al sector salud, a la educación o la infraestructura.



Fuente: cálculos Anif con base en Índice de Competitividad Regional de la CEPAL.